

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Luz Mary López Cardona
DEMANDADOS	AFP Protección S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 3105 015 2019 00738 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 064 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Revoca parcialmente para incluir en restituciones los gastos de administración

En la fecha, **veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colpensiones y grado jurisdiccional de consulta en favor de la misma entidad, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Luz Mary López Cardona**, en el que también se demandó a la **AFP Protección S.A.**, radicado único nacional 05001 3105 **015 2019 0738** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior y Seccional de la Judicatura,

procede a emitir sentencia, según proyecto estudiado, discutido y aprobado en sala virtual, acta Nro. **010** que se plasma a continuación:

Antecedentes

Las pretensiones de la demandante se orientan a obtener la declaratoria de ineficacia de su afiliación al RAIS – AFP Protección S.A., el 04 de agosto de 1995, por incumplimiento al deber de buen consejo y en consecuencia, se le tenga válidamente afiliada al RPMPD administrado por COLPENSIONES y se condene a la AFP Protección S.A. a trasladar los aportes, con todos sus frutos e intereses, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión y a Colpensiones a recibirlos e incorporararlos en la historia laboral. Solicita también condena en costas para las accionadas.

En sustento de ello afirma que nació el 15 de agosto de 1969, en septiembre de 1995 empezó a realizar cotizaciones al sistema general de pensiones. No es beneficiaria del régimen de transición, resultándole aplicables en su totalidad las reglas generales de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de la Ley 797 de 2003. Su primera afiliación al sistema fue el 04 de agosto de 1995, *en la cual no conto con una asesoría en el sentido estricto de la palabra, ni un diagnostico pensional teniendo en cuenta su situación laboral específica donde se le dieran a conocer las posibles ventajas y desventajas comparativas de estar afiliada a un régimen privado vs el régimen de prima media con prestación definida.* El 02 y 04 de mayo de 2013 se dirigió a las oficinas de Protección S.A. en el Municipio de Rionegro, solicitando asesoría tributaria sobre certificados de declaración de renta y rentabilidad de productos. El 4 de mayo de 2016, según documento aportado por Protección, un promotor de esa entidad la visito de manera presencial y en el espacio de observaciones afirmó que la cliente fue contactada en repetidas ocasiones tanto de forma física como telefónica y en todas ellas manifestó no tener

tiempo para atender la reasesoría hasta que en la última visita manifestó a través de su secretaria quedarse en Protección, respecto a lo que explica que nunca ha tenido visitas de la AFP y mucho menos indicación a un promotor de la decisión de permanecer en esa administradora. Que tanto al momento de la afiliación como durante su permanencia en Protección, se omitió ponerle en conocimiento *de manera amplia, suficiente, completa, veraz e imparcial* información trascendental, como la forma en que se calculan las pensiones en uno u otro régimen, las modalidades de pensión en el RAIS, el esquema de multifondos y las características propias de cada régimen para acceder al derecho pensional. El 21 de noviembre de 2018, previa solicitud, recibió proyección pensional en la que se le indicó que a los 57 años en el RAIS accedería a la garantía de pensión mínima y en el régimen de prima media podría acceder a una pensión aproximada de \$4.500.851 y posteriormente un profesional en la materia le realizó proyección que arroja en este último régimen, a los 57 años, una mesada de \$5.133.603.

En auto del **02 de diciembre de 2019** se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la existencia de la actuación las entidades demandadas allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones admite la fecha de nacimiento de la demandante y la reclamación administrativa previa a la acción judicial por estar debidamente documentada, los demás hechos van dirigidos a Protección y le son ajenos o no son hechos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe y la innominada.

La **AFP Protección S.A.**, admite la fecha de nacimiento de la demandante, e igualmente que nunca ha sido beneficiaria del régimen de

transición, toda vez que no ha estado afiliada al Régimen de Prima Media. NO es cierto que *no haya suministrado información adecuada, suficiente, clara, comprensible, detallada, precisa, cierta para el traslado del demandante, pues los asesores de esta Administradora son capacitados permanentemente y cuentan con el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para orientar a los posibles afiliados sobre todas las condiciones propias del Régimen de Ahorro Individual y en este sentido se le brindó por parte de mi representada una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS, ya que estos siempre realizan un estudio previo e individual sobre el caso concreto de cada potencial afiliado y su situación jurídica, y así del análisis de su historia laboral se desprende la asesoría integral que se le brinda, indicándole las diferencias entre ambos regímenes sin que pueda hablarse de ventajas o desventajas ya que simplemente son regímenes distintos, regulados en forma diferente por el legislador, por lo que se impartieron los suficientes elementos de juicio al actor con el fin de dejar plena claridad sobre las condiciones para pensionarse en uno y otro y que con dicha información tomara una decisión libre y voluntaria según lo que considerara le era más conveniente.* Es cierta la solicitud de asesoría tributaria del 02 y 04 de mayo de 2013. No es cierto lo afirmado frente a la búsqueda para efectuarle reasesoría en el año 2016, *pues siempre en procura del bienestar de sus afiliados y precedida por la buena fe, intentó en repetidas oportunidades durante el año 2016 contactar a la demandante para que recibiera su reasesoría pensional y pudiera decidir qué régimen era más benéfico para ella, reiterándole que su plazo máximo para esta decisión era el 15 de mayo de 2016.* No es cierto que no se le haya informado sobre temas trascendentales, *pues se le explicaron con claridad todas las características del RAIS y principalmente que la PENSION SE CONSTRUYE A TRAVES DE UN AHORRO EN UNA CUENTA INDIVIDUAL en la que se consignan sus aportes pensionales y se obtiene rentabilidad financiera, y que es a partir de ese ahorro que se define la mesada, considerando igualmente el capital ahorrado, el bono pensional, edad de retiro, composición de grupo familiar – beneficiario, expectativa de vida, factor actuarial, entre otros.* Los demás supuestos no son ciertos o no le constan, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y formuló **las excepciones** de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción,

aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP – inexistencia de devolver la comisión de administración y la prima de seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia, y la innominada o genérica.

La primera instancia terminó con **sentencia** proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito, en la que **declaró la ineficacia** de la afiliación de la demandante al RAIS, condenando a la AFP Protección S.A. a trasladar a Colpensiones, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, solo el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, sin incluir otros conceptos ni cuotas de administración, condenó a Colpensiones a activar la afiliación de la señora Luz Mary en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y a recibir el saldo existente en su cuenta de ahorro individual. Absolvió a Protección de las restantes pretensiones incoadas en su contra, declaró implícitamente resultas las excepciones, salvo la de prescripción sobre la que se hizo pronunciamiento expreso, sin tener prosperidad. Ordenó consulta a favor de Colpensiones, en caso de no formularse recurso de apelación e impuso condena en costas a las accionadas, fijando el monto de las agencias en derecho a cargo de cada una.

Argumento la falladora que con las recientes sentencias frente al tema emitidas por la Sala de Casación Laboral, se cierran para los juzgadores las posibilidades de interpretación, por lo que ha venido ajustando su criterio, evidenciando que en el caso a estudio no se allega prueba del cumplimiento del deber de información por parte de la AFP, porque si bien se aporta formulario con leyenda pre impresa de libertad y voluntariedad, ello a lo sumo expresa un consentimiento pero no informado y el formulario de reasesoría no cumplió su finalidad, no requiriéndose para que opere la sanción de ineficacia ser beneficiario de

régimen de transición, por lo que encontró procedente imponer la misma, ordenando a la AFP restituir a Colpensiones el saldo de la cuenta de ahorro individual sin incluir otros conceptos, ni cuotas de administración por razones de proporcionalidad. Y en cuanto a las costas al ser una condena objetiva, las impuso a ambas demandadas.

El **recurso de apelación** fue oportunamente interpuesto por la apoderada de **Colpensiones**, solicitando revocar la sentencia, porque esta entidad es un tercero ajeno al negocio jurídico, por lo cual no puede verse perjudicada por el error en el que incurrió la parte demandante. Y en lo referente a las cuotas de administración y demás rubros de la cuenta individual de ahorro, en caso de ratificarse la ineficacia por la conducta indebida de la AFP, es Protección quien debe asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya sea por pago de mesadas pensionales en el RAIS o por gastos de administración, los cuales deben ser asumidos por la AFP con cargo a su propio patrimonio, siguiendo las reglas del art. 963 del C. C., lo anterior sustentado en sentencia 31989 de 2008, de la que cita aparte que considerar ilustrativo sobre el tema. Finalmente en lo que se refiere a las costas procesales, carece esta condena de soporte pues la entidad ha obrado de buena fe y acatando la característica filosófica de sus funciones, sin que pueda ejecutar actos contrarios a la ley o a sus propios reglamentos. Cita apartes de sentencia del Consejo de Estado año 1999.

En lo no recurrido, desfavorable a Colpensiones se conoce en grado jurisdiccional de consulta.

Del término para presentar alegaciones ante esta instancia hizo uso **la apoderada de Colpensiones**, resaltando que esta entidad es un tercero ajeno al negocio jurídico cuya eficacia se discute, por lo que no

debe verse perjudicada por el error en que incurrió la demandante, quien realizó su afiliación a los fondos privados a través de un acto libre y voluntario, sin que existiera vicio en su consentimiento, asumiendo una actitud totalmente pasiva en el trámite y encontrándose dentro de la restricción de los 10 años para el retorno al régimen público. En el evento de ratificarse la declaratoria de ineficacia pide la restitución de las cuotas de administración y demás rubros que hacen parte de la cuenta de ahorro individual, los que debe asumir la AFP con cargo a su propio patrimonio.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Conforme al recuento realizado, el **problema jurídico** en esta instancia se contrae a determinar, si declarada la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, procede su retorno automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, con las consecuentes restituciones económicas por parte de la AFP Protección S.A. y los conceptos que estas comprenden.

Pues bien, se explica por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia 31989 de 2008 bajo la figura de la nulidad, y a partir del año 2014 sentencia SL12136-2014, que la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación o traslado de régimen desinformado es la *ineficacia* o exclusión de todo efecto jurídico a tal acto, lo que encuentra fundamento en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 663 de 1993, artículo 97 numeral 1º, aplicable a las AFP desde su creación, pues solo así es viable la escogencia de las mejores opciones del mercado, deber este que ha tenido una evolución en su regulación, inicialmente como información propiamente — años 1993 a 2009 conforme a Decreto 663 de 1993 – Estatuto Financiero-,

Decreto 720 de 1994, la Ley 795 de 2003; posteriormente agregándose la asesoría ó buen consejo entre 2009 Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010; y por último, con la doble asesoría desde el año 2014 Ley 1748 de esta anualidad, Decreto 2071 de 2015 y Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, sin que para su exigencia tenga incidencia el hecho de gozar o no el afiliado de régimen de transición o estar próximo o no a pensionarse o tener o no consolidado su derecho pensional, y sin que de la suscripción del formulario se infiera el cumplimiento de esta obligación y tampoco se convalide la misma por el transcurso del tiempo, por la movilidad entre administradoras del RAIS, por los actos de relacionamiento o por reasesoría posterior, invirtiéndose en estos casos la carga de la prueba, quedando en cabeza de las administradoras de pensiones la obligación de acreditarla, arts. 1604 del C. C. y 167 del C. G. del P., la que por demás se juzga al momento del acto inicial, por la relevancia e implicaciones que conlleva para el derecho pensional, de carácter fundamental a voces del artículo 48 Superior y 4º de la Ley 100 de 1993 (ver entre otras sentencias SL19447-2017, SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL1838-2019, SL4343-2019, SL4937-2019, SL5144-2019, SL5462-2019, SL5533-2019, SL149-2020, SL373-2020, SL1763-2020, SL081-2021 y SL145-2021), tesis ratificada vía tutela por la misma Corporación entre otras en sentencias (STL3182-2020, STL3187-2020, STL3191-2020, STL3193-2020, STL3196-2020, STL3197-2020, STL3199-2020, STL3200-2020, STL3201-2020, STL3202-2020, STL3226-2020, STL, 18 mar. 2020, rad. 56794, STL, 18 mar. 2020, rad. 57402, STL, 18 mar. 2020, rad. 57902, STL, 18 mar. 2020, rad.58678, STL, 18 mar. 2020, rad. 58918, STL, 18 mar. 2020, rad. 59124, STL, 15 abr. 2020, rad. 57168, STL, 15 abr. 2020, rad. 59268, STL, 30 abr. 2020, rad. 59302).

Brillando por su ausencia prueba de tales circunstancias en el caso a estudio, pues la AFP convocada al trámite no allego prueba de la completa y oportuna información entregada a la demandante al momento de la

vinculación por lo que acertada resulta la declaratoria de **ineficacia** dispuesta por la primera instancia, caracterizándose esta sanción porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, es decir, este instituto excluye o le niega toda consecuencia jurídica, y sus efectos con idénticos a los de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por la jurisprudencia especializada que en estos casos:

... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).

Y en sentencia SL2877-2020, radicación Nro. 78.666, fecha 29 de julio de 2020, frente al tema en concreto de las restituciones, luego de transcribir el artículo 1746 del Código Civil, precisó:

Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular.

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo

posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Subrayado intencional.

Y en relación con los porcentajes para el fondo de garantía de pensión mínima dijo:

En cuanto a los aportes para financiar la garantía de pensión mínima, es oportuno señalar que el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 estableció aportes adicionales sobre el ingreso base de cotización con destino al fondo de solidaridad pensional para financiar la garantía de pensión mínima, para quienes devengaran entre 4 y 16 a 20 salarios mínimos legales mensuales, así como un fondo para el manejo de los mismos –artículo 14 ibidem-.

Pues bien, dicho artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional, a través de sentencia C-797-2004, pero quedaron vigentes los aportes adicionales, de modo que dichos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas, en una subcuenta separada hasta que se cree de nuevo un fondo similar que se encargue de su administración; de hecho, de la subcuenta de cada AFP se financian aquellas prestaciones. Así lo regula el artículo 8.º del Decreto 510 de 2003, hoy compilado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1833 de 2016. Además, el artículo 7.º del Decreto 3995 de 2008 contempla que cuando se efectúe un traslado de recursos del RAIS al régimen de prima media con prestación definida, debe incluirse la cotización correspondiente para la garantía de pensión mínima.

Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas

al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y concluye la Corte:

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima».

Acogiéndose por esta instancia un argumento de autoridad y acatándose el precedente que en línea mayoritaria sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, no tienen prosperidad las consideraciones de la falladora de primer grado tendientes a excluir de la orden de restitución las cuotas de administración, máxime cuando en sentencia de radicado 59370 del 06 de mayo de 2020, el órgano de cierre de esta especialidad exhorta a los jueces a acatar el precedente vertical, en aras de la garantía de los principios de seguridad jurídica e igualdad, pudiendo apartarse del mismo siempre y cuando se cumpla con una carga argumentativa transparente y suficiente,

... mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del disenso, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Así, la posibilidad de separarse del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga (C-621-2015).

Lo que no realiza la a quo, siendo evidente que en este asunto no se cumplen tales supuestos, sino que por el contrario la identidad fáctica de

los casos ya decididos por la alta corporación es total frente al que aquí se estudia, y sin que se haya operado un cambio normativo o transformaciones sociales que obliguen a nuevas consideraciones, razón por la que **se revoca parcialmente el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia, para ordenar a la AFP Protección S.A.,** trasladar a COLPENSIONES, dentro del término allí fijado, además del valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, el porcentaje deducido por gastos de administración (que en los términos del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, incluyen además de tal concepto, las primas de seguros y reaseguros al igual que el porcentaje destinado a garantía de pensión mínima).

Finalmente, teniendo en cuenta que Colpensiones es vinculada al trámite con el fin de hacerle oponible las órdenes impartidas en la sentencia, lo que no le impide ejercer su derecho de defensa, **habrá de revocarse parcialmente el numeral 7º** de la decisión para exonerar a esta entidad de la condena en costas.

Vale aclarar que en este caso no se está autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento de la vinculación y movilidad entre administradoras del RAIS, en los términos del literal b) de la misma norma en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien

es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

Al estar en discusión la eficacia del ato jurídico de traslado, no aplica para esta el termino prescriptivo que para la nulidad relativa prevé el artículo 1750 del Código Civil, pues según la jurisprudencia especializada, entre otras, sentencia CSJ SL1689-2019, dicha figura no opera «*de manera automática, en perjuicio de la posibilidad de acceder a derechos laborales o pensionales que gozan del carácter de imprescriptibles*», razón por la cual «*el análisis de la pretensión relativa a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional*», al ser «*es una cuestión inherente al derecho a la seguridad social*», que redundando en «*un aspecto ínsito a la posibilidad de adquirir una prestación pensional*» no es sujeta a esa figura y, por tanto, puede reclamarse o hacerse exigible judicialmente en cualquier tiempo.

Sin costas en esta instancia al salir parcialmente adelante el recurso y por conocerse en consulta a favor de Colpensiones.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca parcialmente la sentencia revisada por apelación y consulta**, proferida dentro del proceso ordinario promovido por **Luz Mary López Cardona** en contra de la **AFP Protección S.A. y Colpensiones**, así:

El **numeral 2º de la parte resolutiva** para para incluir dentro de los conceptos que debe restituir la AFP Protección S.A. a Colpensiones, los gastos de administración, tal como se explicó en la parte motiva.

El **numeral 7º** para exonerar a **Colpensiones** de la condena en costas.

En lo demás confirma la decisión.

En esta instancia **no hay lugar a condena en costas.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 054** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **05 de abril de 2021.**

Secretario